

Salinas, triste reflejo de Puerto Rico

La desgracia ambiental en la Reserva Bahía Jobos, en Salinas, sin duda es razón para indignación, consternación y acción. Sin embargo, es importante señalar que este no es un caso aislado y que la reflexión debe ser más profunda, ya que Salinas es un triste reflejo de las construcciones informales, que componen 55% de todas las construcciones en la Isla.

Si bien tiene méritos señalar el atropello al estuario en aproximadamente 20 cuerdas de terreno, se debe comprender que en toda la Isla hay 2.3 millones de cuerdas. De estas, es alarmante que cerca de 205,000 corresponden a construcciones informales y 195,000 a construcciones formales, desarrollos o cascos urbanos. Si aspiramos a un mejor medioambiente y entorno, tenemos que ser más juiciosos y pragmáticos con las 1.9 millones de cuerdas en la Isla que aún no han sido impactadas.

Resulta curioso que nadie entienda cómo en la Bahía de Jobos se les proveen servicios a las construcciones ilegales cuando, históricamente, los gobiernos estatales han consen-

tido a esta práctica en toda la Isla. Casos de construcciones informales arropan la Isla, desde la costa hasta las montañas, en residencias construidas de bloque en bloque por sus dueños, sin planos, permisos o inspecciones y hasta negocios que nos gusta frecuentar operan ilegalmente en los paseos de las carreteras y hasta estructuras a orillas del mar. El famoso "ay bendito" no solo ha mirado hacia el lado en la Bahía de Jobos, sino en la Isla entera.

Aquellos cuyos deseos de vivienda o recreación no son atendidos por el desarrollo formal, optan por arriesgarse a pedir perdón, pues sienten que conseguir permisos, es tarea difícil, costosa y casi imposible. Mientras que en los desarrollos y construcciones formales que dependen de permisos para que nuestros proyectos sean financiados y asegurables, algunos demoran años y otros nunca salen aprobados.

La mejor muestra del fracaso del sistema de planificación y permisos, y sus daños al ambiente, es el hecho de que el 54% de la población de la Isla no cuenta con un sistema

de alcantarillado sanitario. Peor aun, estudios señalan que el 90% de esa población tiene pozos sépticos inadecuados. Como resultado, 99% de las pruebas realizadas a las aguas en nuestros embalses y sobre 60% de las aguas costaneras y balnearios no cumplen con los criterios de calidad de agua, en especial para coliformes fecales.

Para los que llevamos años navegando el tortuoso proceso de planificación y permisos en la Isla, es obvio que existen visiones y fuerzas antidesarrollo, de dirigismo gubernamental y con poco respeto hacia el derecho al uso y disfrute de la propiedad privada. Esta visión permea múltiples leyes y reglamentos, incluso el Plan de Uso de Terrenos. La timidez de nuestros gobernantes y la falta de una política pública firme de desarrollo económico, articulada y fundamentada en ciencia, no en temores electorales ni en las redes sociales, permea hasta los escritorios de los funcionarios responsables por la evaluación y otorgamiento de permisos. Esta ambivalencia de nuestros líderes muchas veces causa que a los funcionarios les tiemble la mano cuando un proyecto de desarrollo formal busca atender la demanda de

vivienda, comercial o recreacional, aun cumpliendo con todo el mencionado exceso de leyes y reglamentos.

La experiencia nos dice que mientras nuestros políticos y el sistema vigente de planificación y permisos dificultan el desarrollo formal en cumplimiento de códigos de construcción y normas de seguridad elementales, la gente busca atender sus necesidades, su felicidad y sus anhelos, aunque sea al margen de la ley, de su seguridad y de protecciones o mitigaciones básicas al ambiente.

Seguir planificando para las gradas, al margen de realidades económicas, de las fuerzas de los mercados y la competencia global, le hace daño a Puerto Rico, a su ambiente y a su gente. Tenemos que ser honestos y reconocer que el marco legal y reglamentario vigente, caracterizado por la marcada injerencia e intervención gubernamental, no ha servido para proteger el medioambiente ni logrado agilizar los permisos y establecer una solidez económica que permita promover las necesidades y aspiraciones de nuestra gente.

Los tiempos requieren un modelo radicalmente distinto al vigente y lograrlo requiere mayor sentido común y voluntad de nuestros políticos.



Rafael Rojo

Expresidente
Asociación de
Constructores
de PR